MEDIO: REFORMA
SECCIÓN: NEGOCIOS
PÁGINA: 5
FECHA: 26/MARZO/2014

REFLEXIONES
MAURICIO GONZÁLEZ

¿Desinformación o desinterés?

Entre 2009 y 2013, el Ejecutivo federal se endeudó porque no tuvo más opción. Frente a la imposibilidad de elevar la recaudación, tuvo que pedir prestado para gastar.

Las obligaciones financieras del sector público —incluyendo organismos presupuestarios y no presupuestarios, como el IPAB y los Pidiregas, entre otros— alcanzaron aproximadamente 6.1 trillones de pesos al cierre del año pasado, esto es un aumento de casi 30 por ciento en términos reales en 4 años. En términos más mundanos, esto significó elevar los pasivos públicos de 35 mil a 55 mil pesos por cada mexicano.

A los tres secretarios de Hacienda del Gobierno anterior (Carstens, Cordero y Meade) les gustaba decir que el presupuesto público estaba balanceado. Si ese hubiera sido el caso, la deuda pública no habría crecido como he descrito, pero esa es historia para otra ocasión.

A partir de 2014, el credo de la deuda pública federal ha cambiado. Este año y muy posiblemente el resto de este sexenio, el apalancamiento público se utilizará activamente para acelerar el crecimiento económico, financiando un aumento inusitado de gasto público.

Vale la pena destacar que en enero de 2014 el gasto público programable se acrecentó 20 por ciento anual en términos reales, lo que habría sido imposible sin recurrir al endeudamiento autorizado. Si se cumple el Presupuesto federal de este año, la deuda del sector público aumentará aproximadamente 12 por ciento en términos reales, lo que duplica el ritmo de incremento de la segunda mitad de la Administración anterior.

Algunas calificadoras (Moody's y Fitch) se tragaron el anzuelo y, a pesar de lo anterior, mejoraron la calificación (riesgo), de la deuda pública y nos colocaron en la categoría premium.

El asunto es que el tema de las deudas gubernamentales ha pasado a segundo plano. Hablar de deuda gubernamental no es glamoroso y menos tratándose de los estados y municipios.

Como los procesos electorales del 2013 y este año han sido pocos, no se han querido encender las hogueras políticas con la antorcha de las deudas públicas. No hay duda de que el tema regresará con fuerza y muy probablemente con la desinformación propia de las campañas políticas.

Un aspecto central de las deudas públicas, de la federal hasta las municipales, no es el monto de los pasivos, sino la capacidad de pago de los mismos. Nadie en su sano juicio considera que algún gobierno saldará su deuda, como si fuera una hipoteca o un crédito comercial. Lo importante es que tengan ingresos suficientes para pagar los intereses.

Entre 2009 y 2013, Coahuila —epítome y estigma del sobreendeudamiento estatal— aumentó la relación entre sus pasivos y las participaciones federales (fuente de ingreso principal de las entidades federativas) de 16 por ciento en 2009 a 279 por ciento. Ninguna entidad ha abusado de la contratación de deuda en un periodo tan corto, en este siglo. Sin embargo, hay otros estados con pasivos excesivos, como Chihuahua, Quintana Roo y Nuevo León, todos con más de 200 por ciento de deuda estatal a participaciones en 2013. Por el contrario, otras entidades han manejado su deuda con prudencia al fortalecer más sus fuentes de pago que sus pasivos. Tal es el caso de Querétaro, Aguascalientes, Guanajuato, San Luis Potosí y Puebla, en los que el cociente mencionado ha disminuido. A los primeros no los veo sacrificados en la estaca, ni a los segundos, premiados en el altar del mérito público. ¿Falta de información o de interés?

A propósito de las finanzas subnacionales, cabe destacar el esfuerzo que han emprendido Grupo Interacciones, la UNAM y PriceWaterhouseCoopers al convocar la primera edición del Premio de Investigación sobre el Desarrollo de las Finanzas Estatales.

La investigación y la verdad van de la mano, y en el tema de las finanzas estatales hay mucho por descubrir. Quiénes mejor que los jóvenes y los pensadores para hacerlo.

Socio de GEA Grupo
de Economistas y Asociados